

	<b>JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI</b>
<b>Cali</b>	<b>Veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)</b>

**Auto Interlocutorio No. 452.**

<b>PROCESO:</b>	<b>76001-33-33-001-2021-00188-00</b>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>CARMEN EMILIA LLANOS</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – CASUR</b>

**1. ASUNTO**

Procede el Juzgado a pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio celebrado el 09 de septiembre de 2021, entre la señora Carmen Emilia Llanos y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, ante la Procuraduría 57 Judicial I para Asuntos Administrativos, tal como consta en el acta de audiencia de conciliación glosada en el expediente digital.

El presente acuerdo conciliatorio se soporta en los siguientes

**2. HECHOS**

**2.1.** Que mediante la Resolución No. 1765 del 24 de mayo de 2000, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, ordenó el reconocimiento y pago de una sustitución de asignación de retiro a la señora Carmen Emilia Llanos, en calidad de conyugue del extinto Agente Carlos Enrique Moriano Hurtado.

**2.2.** Que para los años 1997, 1999, 2002 y 2004, la asignación de retiro de la convocante fue reajustada por debajo del índice de Precios al Consumidor, generándose la siguiente diferencia:

<b>Año</b>	<b>Incremento recibido</b>	<b>IPC año anterior</b>	<b>% Diferencia</b>
1997	18.86%	21.63%	2.77%
1999	14.91%	16.70%	1.79%
2002	6.00%	7.65%	1.65%
2004	6.48%	6.49%	0.01%

**2.3.** Que los anteriores incrementos, por debajo del Índice de Precios al Consumidor, se efectuaron con desconocimiento de lo previsto en los articulo 48 y 53 de la Constitución Nacional, y los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 238 de 1995.

**2.4.** Que mediante memorial radicado el 18 de diciembre de 2020, la señora Carmen Emilia Llanos, solicitó ante la entidad accionada el reajuste de la asignación de retiro reconocida a su favor, durante los años 1997, 1999, 2002 y 2004, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor.

**2.5.** Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, resolvió en forma desfavorable su petición a través del Oficio No. 20211200-010001901 ID: 625012 del 18 de enero de 2021

### **3. ACUERDO CONCILIATORIO**

La audiencia de conciliación extrajudicial fue celebrada ante la Procuraduría 57 Judicial I para Asuntos Administrativos, el 09 de septiembre de 2021, donde se acordó lo siguiente:

*“...Que, en el caso que nos ocupa a la entidad SI le asiste ánimo Conciliatorio, razón por la cual anexo la propuesta de Liquidación en atenta solicitud de que su Señoría por favor le corra traslado al Convocante para que exprese su posición frente a la misma. Al señor CARLOS ENRIQUE MORIANO HURTADO, en su calidad de AGENTE ® de la Policía Nacional, y/o a su beneficiaria, la señora CARMEN EMILIA LLANOS, la Entidad está dispuesta a Conciliar, reconocer y pagar lo concerniente al reajuste de la Asignación de Retiro de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.). Se pagará la diferencia resultante de la aplicación del porcentaje Decretado por el Gobierno Nacional o del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), cuando este último haya sido superior, reconocido desde la fecha de la prescripción a la fecha de la Audiencia de Conciliación, es decir, a partir del día 18 de diciembre de 2016, hasta el día 09 de septiembre de 2021. La prescripción correspondiente será la contemplada en las normas prestacionales según el régimen aplicable. Se Conciliará el cien por ciento (100 %) del capital y el setenta y cinco por ciento (75 %) de la indexación. El pago se realizará de la siguiente manera: El valor del cien por ciento (100 %) del capital: Cinco Millones Novecientos Sesenta Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos Moneda Legal Corriente (\$ 5.970.577,00). El valor del setenta y cinco por ciento (75 %) de la indexación: Trecientos Veintitrés Mil Trecientos Cincuenta y Siete Pesos Moneda Legal Corriente (\$ 323.357,00). Menos los descuentos de Ley correspondientes a los Aportes a CASUR, por un valor de Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Moneda Legal Corriente (\$ -251.192,00); y los aportes a Sanidad por un valor de Doscientos Veintiún Mil Ciento Cuarenta Pesos Moneda Legal Corriente (\$ -221.140,00), aportes que todo afiliado o beneficiario debe realizar. Quedando todo en un **VALOR TOTAL A PAGAR** de: Cinco Millones Ochocientos Veintiún Mil Seiscientos Dos Pesos Moneda Legal Corriente (\$5.821.602,00). En la propuesta de Liquidación que anexo, se evidencia que se realizó el reajuste de los años 2016 al 2020. Para el año 2021 la entidad ya realizó el reajuste correspondiente. Una vez aprobada la Conciliación por el Despacho Judicial y radicada en la Entidad acompañada de los documentos legales pertinentes por parte del Convocante, se cancelará dentro de los seis (06) meses siguientes sin*

*reconocimiento de intereses, ni costas, ni agencias. Igualmente, la Entidad en aplicación del Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, revocará los Actos Administrativos mediante los cuales negó el reajuste de su Asignación de Retiro al Convocante”.*

Esta conciliación tuvo fundamento en el Acta No. 02 del 07 de enero de 2021, suscrita por los miembros del Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en donde la entidad convocada elevó la siguiente formula conciliatoria, la cual fue plasmada por la apoderada judicial de dicha institución mediante oficio glosado a folios 56 a 57 del documento 02 del expediente electrónico del proceso, en los siguientes términos:

*“1. Que, en cuanto tiene que ver con las Pretensiones del Convocante, la Entidad Demandada y su Comité Técnico de Conciliación y Defensa Judicial definió su Política Institucional para la Prevención del Daño Antijurídico en sesión realizada el pasado 7 de enero de 2021 y plasmada en el Acta No. 02, a fin de que este tipo de controversias se dirima mediante el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos previsto por la Ley y definido como la Conciliación Judicial y/o Extrajudicial.*

*2.- Que, en el caso que nos ocupa a la entidad SI le asiste ánimo Conciliatorio, razón por la cual anexo la propuesta de Liquidación en atenta solicitud de que su Señoría por favor le corra traslado al Convocante para que exprese su posición frente a la misma.*

*3.- Al señor CARLOS ENRIQUE MORIANO HURTADO, en su calidad de AGENTE ® de la Policía Nacional, y/o a su beneficiaria, la señora CARMEN EMILIA LLANOS, la Entidad está dispuesta a Conciliar, reconocer y pagar lo concerniente al reajuste de la Asignación de Retiro de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.).*

*4.- Se pagará la diferencia resultante de la aplicación del porcentaje Decretado por el Gobierno Nacional o del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), cuando este último haya sido superior, reconocido desde la fecha de la prescripción a la fecha de la Audiencia de Conciliación, es decir, a partir del día 18 de diciembre de 2016, hasta el día 09 de septiembre de 2021. La prescripción correspondiente será la contemplada en las normas prestacionales según el régimen aplicable.*

*5.- Se Conciliará el cien por ciento (100 %) del capital y el setenta y cinco por ciento (75 %) de la indexación.*

*6.- El pago se realizará de la siguiente manera:*

*➤El valor del cien por ciento (100 %) del capital: Cinco Millones Novecientos Sesenta Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos Moneda Legal Corriente (\$ 5.970.577,00).*

➤ *El valor del setenta y cinco por ciento (75 %) de la indexación: Trecientos Veintitrés Mil Trecientos Cincuenta y Siete Pesos Moneda Legal Corriente (\$ 323.357,00).*

➤ *Menos los descuentos de Ley correspondientes a los Aportes a CASUR, por un valor de Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Moneda Legal Corriente (\$ -251.192,00); y los aportes a Sanidad por un valor de Doscientos Veintiún Mil Ciento Cuarenta Pesos Moneda Legal Corriente (\$ -221.140,00), aportes que todo afiliado o beneficiario debe realizar.*

➤ *Quedando todo en un VALOR TOTAL A PAGAR de: Cinco Millones Ochocientos Veintiún Mil Seiscientos Dos Pesos Moneda Legal Corriente (\$ 5.821.602,00).*

*7.- En la propuesta de Liquidación que anexo, se evidencia que se realizó el reajuste de los años 2016 al 2020. Para el año 2021 la entidad ya realizó el reajuste correspondiente.*

*8.- Una vez aprobada la Conciliación por el Despacho Judicial y radicada en la Entidad acompañada de los documentos legales pertinentes por parte del Convocante, se cancelará dentro de los seis (06) meses siguientes sin reconocimiento de intereses, ni costas, ni agencias. Igualmente, la Entidad en aplicación del Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, revocará los Actos Administrativos mediante los cuales negó el reajuste de su Asignación de Retiro al Convocante.”*

El apoderado judicial del convocante en cuanto a la fórmula conciliatoria manifestó su aceptación a la propuesta presentada por la entidad convocada Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Conforme a anterior, procede el Juzgado a pronunciarse sobre la conciliación extrajudicial antes citada, previas las siguientes

#### **4. CONSIDERACIONES**

En principio, debe indicarse que la conciliación en el derecho administrativo es un importante mecanismo para la composición de los litigios que pueden suscitarse a través de los medios de control consagrados en los artículos 138, 140, y 141 del CPACA y en ese orden coadyuva a la descongestión de los despachos judiciales con el fin de asegurar un eficaz acceso a la Administración de Justicia, tal y como lo ordenan el Preámbulo y los artículos 2 y 229 de la Constitución Política. Esta consideración debe ser consecuente con la debida utilización que se pueda hacer de ésta, por ello mismo, exige previa homologación judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 70, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con ocasión de las acciones de nulidad y

restablecimiento del derecho, reparación directa y contractual, previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, con fundamento en la Ley, la jurisprudencia<sup>1</sup> ha determinado los presupuestos para la aprobación de un acuerdo conciliatorio, los cuales son:

- 1.- La acción no debe estar caducada (art. 61 Ley 23 de 1.991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1.998).
- 2.- El acuerdo conciliatorio debe versar sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1.998).
- 3.- Las partes deben estar debidamente representadas y sus representantes tener capacidad para conciliar.
- 4.- El acuerdo conciliatorio debe contar con las pruebas necesarias, no ser violatorio de la ley y no resultar lesivo para el patrimonio público (art. 65 A Ley 23 de 1.991 y art. 73 Ley 446 de 1998).

Así las cosas, se tiene que la conciliación en materia de lo contencioso administrativo y su posterior aprobación, deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de controversia, de manera que no quede duda al juez de conocimiento que existen altas probabilidades de condena en contra de la administración, tanto en primera como en segunda instancia y que la aprobación del acuerdo conciliatorio resultaría provechosa para los intereses de las partes en conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho procederá a analizar el cumplimiento de los presupuestos para determinar si resulta procedente o no, la aprobación de la conciliación extrajudicial celebrada entre las partes en la audiencia de celebrada el pasado 29 de abril de 2021, ante la Procuraduría 59 Judicial I para Asuntos Administrativos.

### **PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO**

#### **1.- Que no haya operado el fenómeno de la caducidad.**

En el presente asunto, el acto administrativo demandado corresponde al Oficio No. Oficio No. 20211200-010001901 ID: 625012 del 18 de enero de 2021, expedido por el jefe de la Oficina Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través del cual se negó el reajuste de la asignación de retiro de la demandante, conforme al Índice de Precios al Consumidor, por ende, al tratarse de una prestación periódica no hay lugar a contabilizar el término de caducidad conforme lo prevé el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA.

---

<sup>1</sup> Ver entre otros, Consejo de Estado, providencia del 06 de diciembre de 2010, C.P. Olga Valle de la Hoz, Actor Álvaro Herney Ordoñez Hoyos y otros, Rad. 19001-23-31-000-2001-00543-01 (33462),

## **2.- Disponibilidad de los Derechos Económicos:**

En este sentido, se advierte que el tema debatido hace referencia al reajuste de la asignación de retiro de la convocante, con base en el Índice de Precios al Consumidor I.P.C., para el periodo comprendido entre los años 1997 a 2004, atendiendo que el aumento anual decretado por el Gobierno Nacional resultó ser inferior al I.P.C., certificado por el DANE.

Al respecto, debe indicarse que la Constitución Política en el literal e) del numeral 19 del artículo 150, otorgó al Congreso de la república la función para dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, entre otros, para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

En virtud de lo anterior, el Congreso de la Republica expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, estableciendo en su artículo 1º lo siguiente:

*“ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:*

- a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;*
- b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República;*
- c) Los miembros del Congreso Nacional, y*
- d) Los miembros de la Fuerza Pública.”*

A su turno, el artículo 2º ibidem señaló los objetivos y criterios que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados previamente referidos, entre los cuales encontramos, los siguientes:

- “a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;*
- b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;*
- c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;*
- d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;*
- e) La utilización eficiente del recurso humano;*
- f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales;*
- g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;*
- h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;*



- i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;*
- j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;*
- k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;*
- l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;*
- ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”*

Seguidamente, el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992, estableció que el Gobierno Nacional, con base en los criterios y objetivos antes señalados, debe cada año modificar el sistema salarial correspondientes a los empleados enunciados en el artículo 1º ibidem, donde se ubican los miembros de la Fuerza Pública.

En desarrollo de lo consagrado en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió anualmente los decretos de reajuste salarial del personal de la Fuerza Pública, específicamente durante los años 1997 a 2004 se proferieron los Decretos 122 de 1997, Decreto 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, que regularon lo atinente a los incrementos salariales del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Por otro lado, se tiene que la Ley 100 de 1993<sup>2</sup> en su artículo 14, previó el reajuste de las pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor – I.P.C., sin embargo, el artículo 279 de la norma en comento, excluyó de su aplicación a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; permitiendo así efectuar los reajustes conforme los Decretos 1212 y 1213 de 1990, es decir, mediante la oscilación de las asignaciones de los miembros de la Policía Nacional en actividad.

No obstante, la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la ley 100 de 1993, disponiendo que el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la misma, sí tienen derecho a que se les reajusten sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE. La norma referida, dispuso:

**“ARTÍCULO 1o.** Adiciónese al artículo [279](#) de la Ley 100 de 1993, con el siguiente párrafo:

*"Párrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos [14](#) y [142](#) de esta ley **para los pensionados** de los sectores aquí contemplados".*

---

<sup>2</sup> Por la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral.

Luego, fue expedido el Decreto 4433 de 2004<sup>3</sup>, mediante el cual se retomó el sistema que existió bajo la vigencia de los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para incrementar las asignaciones de retiro y pensiones del personal de la Fuerza Pública, estableciéndose de nuevo que, dichas prestaciones se aumentarían teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones del personal en actividad. Es por ello, que por vía judicial las asignaciones de retiro se ajustan conforme al I.P.C., para el periodo comprendido entre los años 1995 a 2004, es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 que permitió el reajuste conforme al I.P.C., y hasta la expedición del Decreto 4433 de 2004, que consagró de nuevo el principio de oscilación.

En este sentido, el Honorable Consejo de Estado<sup>4</sup> precisó que en aplicación del principio de favorabilidad y, de conformidad con lo establecido en la Ley 238 de 1995, el reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública debía realizarse con base en el índice de precios al consumidor, toda vez que al hacer la comparación entre los reajustes pensionales decretados por el Gobierno Nacional para las asignaciones en actividad y, el establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, se logró evidenciar que éste último resultaba ser cuantitativamente superior al sistema de oscilación.

De igual forma, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Administrativa al referirse al incremento efectuado con aplicación del índice de precios al consumidor estableció, que éste debe verse reflejado en la base de la asignación que percibe el miembro de la fuerza pública en retiro, la cual, será incrementada a partir del 1 de enero de 2005, con fundamento en el principio de oscilación previsto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004<sup>5</sup>.

Es claro entonces, que si bien con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 las asignaciones de retiro, así como las pensiones del personal de la Fuerza Pública se podían reajustar conforme al índice de precios al consumidor establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, tal beneficio operó hasta el año 2004, toda vez que, a partir de dicha anualidad, imperó de nuevo el principio de oscilación para el reajuste las prestaciones en mención.

De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial antes referido, las normas antes descritas, principalmente el artículo 1º de la Ley 238 de 1995, que adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, refirió de manera expresa que este beneficio, relacionado con el reajuste de la asignación de retiro o de la pensión conforme al Índice de Precios al Consumidor – IPC, previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, está dirigido únicamente a los miembros de la Fuerza Pública que tengan la condición de pensionados, previsión que también fue condicionada al momento de expedirse el régimen general en pensiones.

Ahora bien, establecido el derecho que le asiste a la convocante, debe indicarse que el reajuste de la asignación de retiro sometida a conciliación, corresponde a un

---

<sup>3</sup> “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Providencia del 17 de mayo de 2007, Expediente No. 25000-23-25-000-2003-08152-01(8464-05), Consejero ponente: Dr. Jaime Moreno García.

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Providencia del 15 de mayo de 2012, Expediente No. 2500023250002010005111 01 (0907-2011), Consejero ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.



derecho cierto, indiscutible e irrenunciable, el cual no es disponible por las partes; sin embargo, en el caso concreto, es importante advertir que la entidad convocada dispuso efectuar el pago del 100% del capital, correspondiente a la diferencia resultante de la aplicación del porcentaje decretado por el Gobierno Nacional o del Índice de Precios al Consumidor, cuando éste haya sido superior.

De manera que, la conciliación se plantea con relación al pago del 75% de la indexación de las diferencias causadas por los reajustes efectuados en la respectiva asignación de retiro, como mecanismo para compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, esto es, su aplicación teniendo en cuenta conceptos de equidad y justicia, aspecto que puede ser objeto de conciliación, porque no se trata de derechos laborales irrenunciables, sino de una depreciación monetaria que puede ser transada, como lo indicó el Consejo de Estado mediante providencia fechada el 20 de enero de 2011, dentro del proceso radicado bajo el No. 2005-01044-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

Así las cosas, para el Despacho es claro que el asunto objeto de estudio es susceptible de conciliación.

### **3.- Representación de las partes y capacidad para conciliar:**

Las partes se encuentran representadas legalmente a través de apoderados judiciales, de conformidad con los poderes que les han sido otorgados y que obran en el expediente digital del proceso, por parte de la señora Carmen Emilia Llanos, se encuentra representada por el doctor Luis Fernando Villanueva Campos, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.821.580 y T.P. No. 345.666 del C. S de la J, al cual se le sustituyó el poder conferido inicialmente a la doctora Ana Milena Rivera Sánchez, con plena facultad de conciliar.

Por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, se encuentra que está representada judicialmente por el doctor Yesid Usbaldo Montes Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.091.852 y T.P. No. 267.743 del C. S de la J, a quien se le otorgó la facultad de conciliar, según el memorial poder allegado con los documentos de la parte convocada y agregados al expediente electrónico del proceso.

### **4.- Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley y no resulte lesivo para el patrimonio público:**

Al respecto, debe indicarse que de las pruebas que obran en el plenario, se tiene acreditado lo siguiente:

- Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de la Resolución No. 1765 del 24 de mayo de 2000, ordenó el reconocimiento y pago de una sustitución de asignación de retiro a la señora Carmen Emilia Llanos, en calidad de conyugue del extinto Agente Carlos Enrique Moriano Hurtado.
- Que mediante petición radicada el 18 de diciembre de 2020, la señora Carmen Emilia Llanos, solicitó ante la entidad convocada el reajuste de su asignación de retiro, conforme al Índice de Precios al Consumidor I.P.C., por los años 1997, 1999, 2002 y 2004.

- Que mediante Oficio fechado el 18 de enero de 2021, la entidad convocada resolvió en forma desfavorable la petición presentada por la señora Carmen Emilia Llanos, precisando que el tema debatido no se accedía de manera favorable en sede administrativa, por lo que señaló que a través de apoderado judicial debía de presentar la respectiva solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada ante lo Contencioso Administrativo, para conciliar en dicha etapa las pretensiones de su petición.

- Que el 19 de julio de 2021, la señora Carmen Emilia Llanos, a través de apoderada judicial presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual le correspondió conocer a la Procuraduría 57 Judicial I para Asuntos Administrativos.

- Que durante el trámite de la conciliación extrajudicial, la entidad convocada aportó el Acta No. 02 del 7 de enero de 2021, suscrita por los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de la cual se dispuso conciliar el tema objeto de discusión. En este sentido se propuso efectuar el pago del 100% del capital, correspondiente a la diferencia resultante de la aplicación del porcentaje decretado por el Gobierno Nacional o del Índice de Precios al Consumidor, cuando éste haya sido superior y, el pago del 75% de la indexación. Se indicó igualmente que a la suma reconocida, se le efectuaran los descuentos de Ley.

- Que la entidad convocada presentó la liquidación del reajuste de la asignación de retiro de la convocante, encontrando que durante los años 1997, 1999 y 2002, el incremento salarial reconocido fue inferior al Índice de Precios al Consumidor I.P.C., por lo que procedió al reajuste por dichas anualidades.

De esta forma, se encuentra debidamente respaldada la obligación a cargo de la entidad convocada, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

Ahora bien, revisada la propuesta de conciliación plasmada en el Acta No. 02 del 07 de enero de 2021, por los miembros del Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, en donde se propone pagar el 100% del capital, esto es, la diferencia resultante de la aplicación del porcentaje decretado por el gobierno nacional o del índice de precios al consumidor cuando este último haya sido superior, reconocido desde la fecha de la prescripción a la fecha de la audiencia de conciliación, es decir, a partir del 18 de diciembre de 2016 y el 75% de la indexación, el Despacho considera que dicha conciliación no resulta violatoria de la Ley ni lesiva para el patrimonio público y se encuentra debidamente respaldada en el material probatorio arrimado al plenario.

En este orden de ideas, no encuentra el Despacho reparo en impartir aprobación a la conciliación a la que han llegado las partes, atendiendo a que el apoderado judicial de la parte convocante según el poder obrante en el proceso tiene expresa facultad de conciliar y en aras de la representación judicial que debe ejercer de su mandatario acepta la propuesta formulada por la entidad convocada, en los términos indicados en el Acta No. 02 del 07 de enero de 2021, suscrita por los miembros del Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y conforme a la liquidación aportada como anexo de la misma, en donde se plasmaron los valores a reconocer a favor de la señora Carmen Emilia Llanos.

En virtud de lo anterior, se procederá a aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado el día 09 de septiembre de 2021, entre la señora Carmen Emilia Llanos y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, ante la Procuraduría 57 Judicial I para Asuntos Administrativos.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial del Cali,

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO: APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** de fecha 09 de septiembre de 2021, celebrada ante la Procuraduría 57 Judicial I para Asuntos Administrativos, entre los apoderados judiciales de la señora **CARMEN EMILIA LLANOS** y de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** La **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR** dará cumplimiento al presente acuerdo en los términos dispuestos en el acta de conciliación extrajudicial previamente referida.

**TERCERO:** Esta providencia y el acuerdo extrajudicial hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo.

**CUARTO:** Ejecutoriada esta providencia, expídanse a costa de los interesados las copias de rigor y envíese copia de este proveído a la PROCURADURÍA 57 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

**QUINTO:** En firme esta providencia, háganse los registros respectivos en el sistema de gestión judicial SIGLO XXI.

**SEXTO:** Este juzgado comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**  
**Correo electrónico:** [adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
**Teléfono:** (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**  
**Correo electrónico:** [procjudadm57@procuraduria.gov.co](mailto:procjudadm57@procuraduria.gov.co)  
[mecaicedo@procuraduria.gov.co](mailto:mecaicedo@procuraduria.gov.co)
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**  
[repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- ✓ **Radicación memoriales:**  
[of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12  
(2) 896-24-11

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO**  
**Juez**

LCMS.

**Firmado Por:**

**Paola Andrea Gartner Henao**  
**Juez**  
**Juzgado Administrativo**  
**Oral 001**  
**Valle Del Cauca - Cali**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**fd13a307c9986872567b534733d6eba5ae2957b92c4dec0b5fc6c12941b32ea5**

Documento generado en 21/09/2021 03:03:14 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**